

CORRIENTES: CINCO MESES DE GOBIERNO

Juan Pablo Valdés: fortalezas, el desarrollo y la prueba de la caja

A cinco meses de haber asumido la Gobernación, Juan Pablo Valdés administra una provincia que acumula reclamos históricos contra la Nación, apuesta a la mayor inversión privada de su historia y libra, al mismo tiempo, una batalla doméstica por el equilibrio fiscal. La economía, como se dijo siempre, manda.

Por **Jaime Meza**
Jefe de Redacción
Coordinador Multiplataforma

Este domingo 10 se cumplen exactamente cinco meses desde que Juan Pablo Valdés recibió la banda y el bastón de mando de manos de su hermano Gustavo, en el patio de la Casa de Gobierno. Asumió con el 51,91 por ciento de los votos, una base fiscal ordenada y una hoja de ruta clara: el Plan Estratégico Corrientes 2030.

Lo que no estaba en el mapa era la velocidad con que el contexto nacional lo pondría a prueba.

Cinco meses después, el balance oficial es optimista en materia de inversiones y de gestión ante Nación. El balance de la oposición señala una caja cada vez más ajustada, Coparticipación en caída y un conflicto institucional con el Poder Judicial que todavía no encontró desenlace (*ver nota Lo que dicen quienes no acompañan*). La verdad, como suele ocurrir, transita por el medio.

NEGOCIAR LO QUE DEBEN A LA PROVINCIA

La agenda financiera de Corrientes frente al Gobierno nacional fue prioritaria para el mandatario provincial, con dos frentes simultáneos. El primero fue la deuda previsual: el déficit del Instituto de Previsión Social



TRANCO FIRME. Más allá de los cimbronazos locales y nacionales, el Gobernador sostuvo un rumbo trazado con prioridades que ya se expusieron ante la comunidad.

(IPS) por cajas jubilatorias no transferidas en los años 90, que según estimaciones provinciales supera los 140.000 millones de pesos.

El Gobernador avanzó con la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque aclaró que el entendimiento no implicará renunciar a los reclamos judiciales vigentes.

El segundo frente fue el de las regalías hidroeléctricas, un conflicto que lleva décadas. Corrientes genera energía en Yacyretá y Salto Grande, pero perci-

bía -según el propio Gobierno provincial- valores inferiores a los que reciben otras jurisdicciones.

En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó formalmente una instancia de diálogo entre la Provincia, el Estado nacional y Cammesa (*ver nota Corrientes pide lo suyo*). Valdés calificó ese momento como "histórico". Las negociaciones siguen activas: el Gobernador pule los detalles finales de un posible acuerdo. De lle-

garse a concretar, el impacto sería de aproximadamente 1 millón de dólares mensuales adicionales para las arcas provinciales, fondos que el mandatario ya anunció que destinará a sostener el empleo industrial.

La caída de Coparticipación Federal, que el Gobernador estimó entre 40.000 y 50.000 millones de pesos de deuda acumulada, es el telón de fondo que explica buena parte de las tensiones que atraviesa la gestión.

Corrientes pide lo suyo



Durante más de 25 años, la Nación generó energía en Yacyretá y Salto Grande sin abonar a Corrientes lo que le correspondía por el uso de sus recursos naturales. La demanda tiene base en una distorsión en el cálculo de regalías que perjudicaba a la provincia frente a otras jurisdicciones.

Pasaron infinidad de presidentes, teniendo -casi siempre- a la Provincia parada en la otra vereda de los colores políticos de turno. Ni siquiera con Mauricio Macri se logró un avance contundente, que permitiera finalizar con el desfase administrativo que descontextualiza los dividendos correntinos.

UN PASO VITAL

Por lo menos, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó por primera vez una instancia formal de diálogo entre la Provincia, el Estado nacional y Cammesa -la administradora mayorista del mercado eléctrico-. Un entramado institucional del que participaron el fiscal de Estado, Horacio Ortega, el procurador José Roa y el titular de la Dirección Provincial de Energía (Dpec), Pablo Cuenca. "Fue un momento histórico", dijo Valdés al salir de esa primera audiencia.

El fiscal Ortega puso en blanco sobre negro el problema: había una diferencia entre lo que se le pagaba a Corrientes y lo que recibían otras provincias. La Provincia reclama que esa brecha sea corregida hacia adelante y que la deuda acumulada sea reconocida. Las cifras que maneja el ex gobernador Gustavo Valdés -ahora senador provincial- ubican ese pasivo histórico en torno a los 500 millones de dólares.

El impacto mensual de un eventual acuerdo sería, según el Gobernador, de aproximadamente un millón de dólares extra para las arcas provinciales, fondos que piensa destinar a sostener el empleo industrial en un contexto de consumo deprimido.